

LA NUEVA LEY DE ABUSOS DE PUBLICIDAD

1.- Antecedentes

En la sección " Documentos " del Nº 4 de la revista " Comunicación y Medios ", año 1984, informamos sobre las modificaciones que había sufrido la ley de Abusos de Publicidad por parte de la ley Nº 18.313 publicada en el Diario Oficial del 17 de mayo de 1984.

Esta última disposición legal tenía por objeto cumplir con la norma contenida en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República de Chile, referente a la protección y respeto a la vida privada y pública de las personas y de sus familias..

La publicación de la mencionada ley Nº 18.313 produjo una reacción muy adversa de parte de las organizaciones que agrupaban a los periodistas y a los medios de comunicación social, al extremo de que la

propia Secretaría General de Gobierno constituyó una comisión encargándole la preparación de un anteproyecto que modificara las disposiciones de la ley que había sido objeto de los más fuertes rechazos.

Esta Comisión fue integrada por los profesores universitarios José Luis Cea en representación de la Asociación Nacional de la Prensa, Alfredo Etcheberry en representación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Sergio Contardo en representación del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad de Chile y Tomás Mac Hale en representación de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Chile.

La Comisión entregó el anteproyecto, con su respectivo informe (ver revista " Comunicación y Medios" N° 4 págs. 165 a 178) con fecha 10 de julio de 1984 a la Secretaría General de Gobierno, pero en definitiva su texto no fue aprobado por el ejecutivo.

Cuando asumió el mando el actual Gobierno anunció como una de sus primeras preocupaciones la de derogar todas aquellas disposiciones que limitaban exageradamente la acción informativa del Periodismo. Para preparar ese trabajo el Ministerio Secretaría General de Gobierno constituyó una Comisión presidida por el Subsecretario don Edgardo Riveros e integrada por el jurista don José Luis Cea, por doña Silvia Pelegrini en representación de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Chile, por don Sergio Contardo

en representación del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad de Chile, por don Jaime Martínez en representación de la Asociación Nacional de la Prensa, por don Jorge García en representación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, por don Pablo Portales y don Juan Awad en representación del Colegio de Periodista de Chile, y por los asesores jurídicos del Ministerio señores Jorge Donoso, Guillermo Laurent, Pablo Yaeger y Jorge Jorquera.

Esta Comisión, por resolución del Presidente de la República, tenía dos objetivos: 1º : elaborar a la brevedad posible un anteproyecto de ley que derogara las principales disposiciones legales que contrariaban a la libertad de expresión y 2º : preparar un anteproyecto completo que viniera a substituir a la actual Ley de Abusos de Publicidad (Ley 16.643 y sus modificaciones).

La Comisión cumplió con rapidez el primero de os objetivos encargados y el Presidente de la República procedió a enviar el proyecto respectivo al Parlamento para su discusión, con el Mensaje Nº 15 del 9 de abril de 1990.

Los parlamentarios formularon numerosas indicaciones, entrando en materias que se suponía serían tratadas en el segundo proyecto que enviaría el Ejecutivo en su oportunidad. Esto llevó al Gobierno a encargar a la Comisión que presidía el Subsecretario señor Riveros, el estudio de diversos puntos no contemplados en el proyecto primitivo. La Comisión, para estos efectos, tomó

como fundamento el anteproyecto de 1984 que no había sido acogido por el Gobierno anterior, más algunas disposiciones nuevas, las que fueron recogidas por el Ejecutivo y remitidas como "indicaciones" al Parlamento, con fecha 8 de mayo de 1990.

El proyecto sufrió una larga tramitación y, con algunas modificaciones introducidas por los parlamentarios, se convirtió finalmente en la ley N° 19.048. La ley fue publicada en el Diario Oficial con fecha 13 de febrero de 1991, fecha en que precisamente se celebra el día de la prensa, y el Presidente de la República emitió ese día un mensaje, cuyo texto publicamos más adelante.

La nueva ley N° 19.048 contiene, propiamente, dos tipos de disposiciones: las referentes a derogaciones o modificaciones de diversas otras normas legales y las relativas directamente a la ley de Abusos de Publicidad (Ley 16.643). Con el objeto de facilitar la lectura del texto de la ley, que publicamos a continuación del mensaje del Presidente, en su texto íntegro refundido con la ley 16.643, formulamos las siguientes aclaraciones:

a) Los artículos 1º, 3º, 4º y 5º y los dos artículos transitorios, de la nueva ley, derogan normas que ya no tenían aplicación, " porque eran complementarias de otras de tipo constitucional que fueron eliminadas o que ahora no tienen aplicación por estar en vigencia las disposiciones permanentes de la Constitución y, en cambio, ya no lo están las de carácter transitorio. Tal es el caso

de la leyes 18.015 y 18.150 que reglamentaban las transgresiones del artículo 24 transitorio y 18.662, orgánica del suprimido artículo 8º de la Constitución". También se dispone que los delitos de ofensas a las Fuerzas Armadas y Carabineros, cometidos a través de un medio de difusión, serán conocidos en todo caso por la Justicia ordinaria y no por la Justicia militar.

b)El artículo 2º de la ley contiene las modificaciones a la ley de Abusos de Publicidad, (Nº 16.643) y el texto refundido de estas modificaciones con la ley es el que más adelante publicamos completo.

Hemos impreso con tipo especial (negrita) las diversas disposiciones que son nuevas en la ley actualmente vigente, con lo que el lector podrá darse cuenta de que junto a normas de mera actualización hay otras de especial importancia:

- El nuevo artículo 19 tiende a evitar la imputación de hechos falsos o la difusión de noticias o documentos falsos, reservados o secretos, estableciendo también el efecto que tiene la oportuna y completa rectificación por parte del medio de comunicación;

-El artículo 21 contiene las principales modificaciones relativas a los delitos de injuria, calumnia y " chantaje " o extorsión, estableciendo por una parte su penalidad y por otra determinando las publicaciones que no constituyen injurias, como también los casos en que se acepta la demostración de la verdad de las

expresiones estimadas injuriosas, lo que se denomina la " exceptio veritatis ";

- El artículo 22 contiene la defensa de la vida privada o familiar, el derecho a la imagen, los hechos que en todo caso pertenecen a la vida privada y, por el contrario, dada la dificultad de precisar si ciertas situaciones constituyen hechos de la vida privada o de la vida pública, se señalan seis casos importantes y genéricos que no constituyen hechos de la vida privada o familiar. También se indican las situaciones en que se admite la prueba de la verdad de la imputaciones de hechos relativos a la vida privada;

- Muy importante es la norma contenida en el artículo 31 en el que junto con establecer la indemnización por las imputaciones injuriosas o calumniosas, se explican los casos en que tales indemnizaciones no proceden, los que son de especial interés para los medios de comunicación;

- Otros puntos de interés son los contenidos en el artículo 6º inciso final, en el que se define lo que se entiende por " diario" para todos los efectos legales y en el artículo 53 en el que se precisa lo que abarcan los términos de " familia " o " familiares " en la presente ley.

Por último cabe agregar que la Comisión ha continuado su trabajo y está elaborando el texto completo del anteproyecto sobre libertad de expresión o

de opinión e información, y que una vez finalizado, deberá entregar al Presidente de la República, cumpliendo con el segundo de los objetivos que se le encomendó.

2.- Mensaje del Presidente de la República

Hoy, 13 de febrero, se celebra en nuestro país el " día de la prensa " . Esta fecha fue elegida como un homenaje al aniversario de la aparición de el primer periódico nacional: " La Aurora de Chile ", fundado y dirigido por fray Camilo Henríquez. Pienso, por eso, que esta fecha es la más propicia para la publicación de la ley N° 19.048, conocida como de " libertad de expresión" Este es el mejor homenaje que podemos entregar a las personas y organismos vinculados a la actividad periodística.

La aparición de " La Aurora de Chile " el 13 de febrero de 1812 fue un hecho decisivo para consolidar nuestra independencia nacional. En períodos más recientes de nuestra historia, el rol jugado por los medios de difusión fue también un elemento fundamental para retornar a la senda de la democracia. El papel transcendental de la prensa tiene imborrables ejemplos en otras latitudes, y es así como gobiernos e intereses influyentes han visto tambalear su poderío ante la denuncia seria y fundada de órganos periodísticos compenetrados de sus obligaciones con la comunidad.

Nadie puede negar la importancia que tiene la actividad periodística en el desarrollo de la sociedad, ni como la libertad de expresión cumple una labor imprescindible en el mantenimiento y fortalecimiento de la democracia. Como dijimos en el mensaje del proyecto de ley que hoy se publicó: " la libertad de expresión es inherente y parte inseparable de un régimen democrático, hasta el punto que se puede afirmar que éste no puede existir sin la plena vigencia de aquella ". Este criterio fue ampliamente compartido por los parlamentarios que dieron su aprobación a nuestra iniciativa y que en el debate enriquecieron nuestra propuesta, dando como fruto la ley que hoy comienza a regir.

Ha sido clave la colaboración prestada por el Colegio de Periodistas, La Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación de Radiodifusores de Chile y las escuelas de Periodismo de las Universidades de Chile y Católica, quiénes a través de sus representantes en la comisión que ha funcionado en el ministerio Secretaría General de Gobierno y con la participación de sus distinguidos catedráticos especialistas en la materia, han tomado parte en la elaboración de los textos que han sido propuestos y aprobados por el Congreso Nacional.

Mi gobierno se ha comprometido frente al país en el establecimiento de normas que aseguren la libertad de información. Con la publicación de la ley N° 19.048 se ha cumplido la primera etapa de nuestro itinerario. Ahora queda por cumplir la segunda, la que se iniciará con la presentación de un nuevo proyecto de

La nueva ley de abusos de publicidad

ley - preparado por la misma comisión antes mencionada - en que se abordará el ejercicio de la libertad de expresión desde la perspectiva de su protección y no desde la sanción a sus eventuales abusos.

Los avances que hemos logrados obligan a quienes trabajan en el periodismo a ejercer su labor con mayor responsabilidad. Frente a una mayor libertad de expresión corresponde una mayor responsabilidad en su ejercicio.

En estos días, nuestro país vive una etapa crucial en la restauración de valores fundamentales de respeto a nuestro prójimo, tanto en su integridad física como moral. En esta materia, la prensa, una vez más, tiene un aporte sustancial que hacer. Cada una de las personas que está vinculada a los medios de difusión debe saber, en conciencia, de que modo puede servir efectivamente a nuestra reconciliación, haciendo compatible su deber de informar con el bien común. No me corresponde dar normas de comportamiento, pero cada una de ellas sabrá de que manera puede poner al servicio de tan altos fines los formidables mecanismos de que dispone. Confío en que cada cual sabrá cumplir con esa obligación ética.

Hoy, con la publicación de la ley N° 19.048 sobre libertad de expresión, estamos aportando a un nuevo cimiento en la reconstrucción de nuestra democracia.

PATRICIO AYLWIN AZOCAR
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Santiago, 13 de febrero de 1991.

3.- TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE ABUSOS DE PUBLICIDAD

TITULO I

DE LA DEFINICION DEL DERECHO Y DE LAS FORMALIDADES EXIGIDAS PARA SU EJERCICIO

Artículo 1º La publicación de la opiniones por la imprenta, y, en general, la transmisión pública y por cualquier medio de la palabra oral o escrita, no está sujeta a autorización o censura previa alguna.

El derecho que garantiza a todos los habitantes de la República el Nº 12 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado incluye el no ser perseguido a causas de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión .

El abuso de este derecho sólo puede castigarse en los casos y formas señalados en la presente ley.

Artículo 2º Se prohíbe discriminar arbitrariamente entre las empresas propietarias de diarios, periódicos, revistas, radiodifusoras y estaciones de televisión en lo relativo a la venta de papel, tinta, maquinarias u otros elementos de trabajo, o respecto de las autorizaciones o permisos

que fueren necesarios para efectuar tales adquisiciones dentro o fuera del país. La infracción de esta prohibición será sancionada con presidio menor en su grado mínimo y multa de tres a diez **ingresos mínimos**

Artículo 3º Toda persona que tenga a su cargo o dirección una imprenta, litografía o cualquier otro taller impresor, deberá poner el nombre de éste, el del lugar y la fecha, en cada uno de los ejemplares de toda publicación que hiciere. Se presumirá la falta de pie de imprenta por la sola presentación de un ejemplar que carezca de él.

La existencia de toda imprenta, litografía o taller impresor deberá ser declarada por su dueño, dentro de los 60 días siguientes a su instalación, al Director de la Biblioteca Nacional, el que llevará un Registro Especial de todos ellos. Sin una certificación que acredite el cumplimiento de esta exigencia, las Municipalidades no podrán otorgar o renovar la respectiva patente.

Los que a cualquier título adquieran algunos de los establecimientos señalados en el inciso precedente, deberán declarar esta circunstancia para los efectos de su inscripción en el citado Registro. La omisión de este trámite hará incurrir a los llamados a efectuarlo en la misma sanción del inciso anterior.

Artículo 4º Todo impresor enviará de los impresos que publique, de cualquier naturaleza que sean, y al tiempo de su publicación, 15 ejemplares a la Biblioteca Nacional.

Tratándose de publicaciones periódicas, afiches, carteles u otros impresos similares, deberá enviar, asimismo, dos ejemplares a la Intendencia o Gobernación respectiva.

Cuando se trate de impresos de carácter jurídico, deberá enviar, además, un ejemplar a la Biblioteca de la Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior.

Para el solo efecto de lo establecido en el inciso anterior, se entenderá por impreso toda reproducción del pensamiento humano por medio de la imprenta, o de discos, cintas magnetofónicas, mimeógrafos u otros procedimientos similares, que estén destinados a ofrecerse comercialmente al público.

Cuando un trabajo de impresión se efectúe parte en un taller y parte en otro, será quien imprima el cuerpo principal el que deba depositar en la Biblioteca Nacional el texto con sus carátulas, portadas, láminas, ilustraciones, dibujos, grabados, mapas y reproducciones facsimilares.

Las estaciones de radiodifusión y televisión estarán obligadas a dejar copia o cinta magnetofónica y conservarla durante 20 días, de toda transmisión de noticias, entrevistas, charlas, comentarios, conferencias, disertaciones, editoriales o discursos y a enviarlas, dentro del quinto día a **requerimiento del Ministerio Secretaría General de Gobierno o de la Intendencia o Gobernación respectiva, o de parte.** El incumplimiento malicioso de la obligación anterior, así como la alteración de la copia

o cinta magnetofónica será castigada con la pena establecida en el artículo 210 del Código Penal.

De los impresos que se les envíen en conformidad a lo prescrito en el inciso 1º, la Biblioteca Nacional mantendrá dos ejemplares en la Sección Chilena fuera de consulta y como reserva intocable, situación que sólo podrá alterarse excepcionalmente, previa resolución del Ministerio de Educación Pública, y enviará al Ministro del Interior, al Ministerio Secretaría General de Gobierno y a la Biblioteca del Congreso Nacional un ejemplar de cada obra o impreso que estos organismos le soliciten, pudiendo conservar o distribuir los restantes en la forma que estime conveniente.

Artículo 5º El propietario de todo diario, revista o escrito periódico cuya dirección editorial se encuentre en Chile, o agencia noticiosa nacional y el concesionario de toda radiodifusora o estación de televisión deberán ser chilenos y tener domicilio y residencia en el país.

Si dicho propietario o concesionario fuere una sociedad o comunidad se considerará chilena siempre que pertenezca a personas naturales o jurídicas chilenas el 85% del capital social o de los derechos de la comunidad. Las personas jurídicas que sean socios o formen parte de la comunidad o sociedad propietaria deberán tener, también, el 85% de su capital en poder de chilenos.

Los diarios, revistas, escritos periódicos,

agencias noticiosas, radiodifusoras y estaciones de televisión deben tener un director responsable y una persona, a lo menos, que lo reemplace.

El director y quienes lo reemplacen deberán ser chilenos, tener domicilio y residencia en el país, ser personas que no tengan fuero, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y no haber sido condenados en los últimos dos años como reincidentes en delitos penados en la presente ley. La mujer casada podrá ser directora o reemplazante. El director de todo diario, revista o escrito periódico deberá cumplir, además, con el artículo 23 de la Ley Nº 12.045. Cuando tales publicaciones tengan carácter exclusivamente estudiantil, bastará que el director sea un estudiante mayor de 16 años.

Respecto de las publicaciones de carácter informativo editadas por las Misiones extranjeras acreditadas en el país no se aplicarán los requisitos de la nacionalidad y de la carencia de fuero, ni será necesario el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo siguiente. En todo caso, los Jefes de Misiones deberán enviar, además, cuatro ejemplares de cada publicación al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El requisito de nacionalidad chilena a que se refiere este artículo no se aplicará en el caso de revistas técnicas y científicas, de las publicaciones editadas en idiomas extranjeros y de las revistas de carácter internacional que se impriman en Chile y se distribuyan en el país y en el extranjero, aunque su dirección editorial se encuentre en Chile,

Artículo 6º No podrá iniciarse la publicación de ningún diario, revista, escrito periódico o transmisión de estaciones de radio o televisión que no cumpla con los requisitos del artículo 5º y sin que previamente el o los propietarios, o el o los concesionarios, en su caso, si fueren personas naturales, o el representante legal si se tratare de una persona jurídica, lo declaren por escrito ante el Gobernador respectivo .Esta declaración irá firmada, además, por el Director y contendrá las siguientes enunciaciones:

a) El título del diario, revista o periódico e indicación de los períodos que mediarán entre un número y otro y el nombre de la radiodifusora y estación de televisión y la frecuencia de sus transmisiones, en su caso.

b) El nombre, apellido, domicilio y cédula de identidad del propietario o concesionario, en su caso, si fuere persona natural, o de las personas que tienen la representación de la sociedad, corporación o fundación si se tratare de una persona jurídica;

c) El nombre, apellido, domicilio y cédula de identidad del director e iguales menciones respecto de las personas que deben reemplazarlo en caso de ausencia o impedimento, con indicación del orden de precedencia en que ellas deban asumir dicho reemplazo. Tratándose de radiodifusoras o estaciones de televisión deberá indicarse el nombre del Director responsable de los programas informativos, si lo hubiere, y

d) Ubicación de sus oficinas principales si se tratare de una publicación escrita, o indicación de la imprenta en que se va hacerse la impresión, o de sus plantas de transmisión y oficinas principales si fuere una estación radiodifusora o televisora.

El propietario, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de presentada su declaración al Gobernador respectivo, entregará personalmente o enviará por correo y en carta certificada copia de ella al Director de la Biblioteca Nacional o al de la **División de Comunicación Social**, según corresponda. En todo caso, el Gobernador la transcribirá a dichos funcionarios dentro de los días siguientes a su recepción.

El Director de la Biblioteca Nacional y el Director de la **División de Comunicación Social**, en su caso, deberán llevar un registro de los órganos de difusión existentes en el país con indicaciones al día de los antecedentes señalados en el inciso 1º de este artículo.

Cualquier cambio que se produzca respecto a las enunciaciones ya indicadas, será objeto de una declaración que deberá hacerse por el propietario o concesionario y el Director dentro de los dos días siguientes y en la forma establecida precedentemente.

El Gobernador y el Director de la **División de Comunicación Social**, en su caso, darán recibo de estas declaraciones sin que puedan excusarse de hacerlo, ni aun a pretexto de ser ellas falsas o inexactas.

Las declaraciones a las que se refiere este artículo deberán ser hechas ante notario y ser suscritas por las personas a que ellas se refieren en señal de que aceptan las funciones que se les atribuyen, y les será aplicable lo dispuesto en el artículo 210 del Código Penal.

En la primera página o en la página editorial o en la última y en lugar destacado de todo diario, revista o escrito periódico y al iniciarse las transmisiones diarias de toda estación de radio y televisión, se indicará el nombre, apellido y domicilio del propietario o concesionario, en su caso, si fuere persona natural, o el de las personas que tienen la representación de la persona jurídica si se tratare de una sociedad, corporación o fundación e iguales menciones respecto al Director.

Para todos los efectos , legales se entenderá por " diario " toda publicación periódica que habitualmente se edite, a lo menos, cuatro días en cada semana y que cumpla con los demás requisitos establecidos en esta ley.

Artículo 7º La infracción de lo dispuesto en los incisos 1º y 2º del artículo 3º será sancionada con una multa de medio a un ingreso mínimo.

La alteración en un impreso del nombre de la imprenta, del lugar o de la fecha, se sancionará con una multa de un ingreso mínimo.

La infracción de lo dispuesto en el inciso

1º del artículo 4º y toda otra infracción distinta de las penadas en el inciso 4º del mismo artículo, será sancionada con una multa de medio **ingreso mínimo**.

La infracción al requisito de la nacionalidad chilena exigida por el artículo 5º o la omisión de la declaración de que trata el artículo 6º será sancionada con una multa de uno a cuatro **ingresos mínimos**. Si después de notificada la infracción continuare la publicación o transmisión, se aplicará igual multa por cada publicación aparecida o transmisión efectuada sin que se haya dado cumplimiento a la obligación respectiva.

Cualquiera otra infracción, omisión o inexactitud en el cumplimiento de las exigencias establecidas en los artículos 5º y 6º de la presente ley, será sancionada con una multa de uno a dos **ingresos mínimos**, sin perjuicio de la pena que corresponda por falsedad de la declaración.

Del pago de las multas aplicadas al director será solidariamente responsable el propietario o concesionario

Artículo 8º Salvo lo dispuesto en el artículo 2º, en el inciso 4º del artículo 4º y en el inciso 6º del artículo 6º, el conocimiento de las infracciones y la aplicación de las multas a que se refieren los artículos precedentes corresponderá al Director de la Biblioteca Nacional, quien actuará de oficio o por denuncia del Director de la

División de Comunicación Social, del Intendente o Gobernador respectivo o de particulares.

La denuncia se hará por escrito al Director de la Biblioteca Nacional, quien, previas las comprobaciones del caso, decretará el cumplimiento de la disposición infringida y aplicará la multa que corresponda.

El infractor condenado podrá reclamar ante el Juez de turno de Mayor Cuantía en lo Civil de asiento de Corte de Apelaciones que corresponda, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación del fallo administrativo.

Esta notificación la efectuará por carta certificada el Secretario de la Gobernación respectiva a requerimiento del Director de la Biblioteca Nacional, quien también pondrá su resolución en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado.

La reclamación se tramitará de acuerdo con el procedimiento del juicio sumario, entendiéndose como demandado el Fisco, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado o de sus procuradores, en su caso.

Se tendrá por desistido al reclamante que no hiciere notificar personalmente o por cédula al representante del Fisco dentro de quince días de proveída la reclamación o que no concurra a la audiencia prevista

en el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil.

El Consejo de Defensa del Estado hará efectivo el cobro de la multa impuesta por el Director de la Biblioteca Nacional, la que se hará exigible vencido el plazo que otorga el inciso 3º para reclamar de ella, o desechada que sea la reclamación cuando ésta se hubiere deducido. En el juicio ejecutivo no se admitirán otras excepciones que las del pago y prescripción.

Artículo 9º La persona que consienta en aparecer como director sin serlo y la que, en tal caso, ejerza de hecho la dirección, incurrirán en la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. La apreciación de estas circunstancias se hará en conciencia por el tribunal que corresponda.

Artículo 10 La responsabilidad por las infracciones administrativas previstas en este Título prescribirá en seis meses contados desde su comisión.

TITULO II

DE LAS RECTIFICACIONES Y DEL DERECHO DE RESPUESTA

Artículo 11 Todo diario, revista, escrito periódico o radiodifusora o televisora, esta obligado a insertar o difundir gratuitamente las aclaraciones o rectificaciones que le sean dirigidas por cualquiera persona natural o jurídica ofendida o infundadamente aludida por alguna información pública, radiodifundida o televisada.

Esta obligación regirá aun cuando la información que motiva la aclaración o rectificación provenga de terceros que han solicitado o contratado su inserción.

Las aclaraciones o rectificaciones deberán circunscribirse en todo caso al objeto de la información que las motiva y no podrán tener una extensión superior a la de ésta, pero no podrá exigirse que tengan menos de quinientas palabras ni más de dos mil.

El requerimiento al diario, revista o escrito periódico, radiodifusora o televisora, en que se solicite la aclaración o rectificación, deberá dirigirse al Director del órgano de difusión o a las personas que deban reemplazarlo y podrá probarse por cualquiera de los medios legales.

Los notarios y receptores judiciales están obligados a notificar al Director del órgano de difusión en que hubiere aparecido la información objeto de la aclaración o rectificación, o a quien lo reemplace, a simple solicitud del interesado. En tal caso la notificación se hará por medio de una cédula que contendrá íntegramente el texto de la respuesta, la que será entregada al Director o persona que lo reemplace, o en su defecto a cualquier empleado que se encuentre en el domicilio de las oficinas principales a que se refiere la letra d) del artículo 6º o en el señalado en el inciso 7º del mismo artículo.

El escrito de aclaración o rectificación deberá publicarse íntegramente sin intercalaciones, en la misma página y con los mismos caracteres que el artículo que lo ha provocado, si se trata de una publicación, o difundirse en el mismo espacio, programa o audición con las mismas características de la transmisión que lo ha motivado, si se trata de estaciones de radio o televisión. La inserción o difusión de la respuesta se hará en la primera edición o audición que se haga después de las 12 ó 4 horas siguientes, respectivamente, al momento en que se entreguen los originales que la contenga. Si se tratare de una publicación que no aparezca todos los días, excluido el domingo, la aclaración o rectificación deberá entregarse con 72 horas de anticipación, por lo menos.

El diario, revista, escrito periódico, radiodifusora o televisora no podrá negarse a insertar o difundir la respuesta, sin perjuicio de la responsabilidad del autor de ésta y, si se hicieran a ella nuevos comentarios,

éste tendrá derecho a réplica bajo las mismas reglas anteriores. En todo caso los referidos comentarios deberán hacerse en forma absolutamente separada del desmentido o rectificación.

Artículo 12 La reclamación por no haberse publicado oportunamente la respuesta deberá presentarse al Juez del Crimen que corresponda acompañada de los medios de prueba que acrediten la entrega de la respuesta, del ejemplar que motiva la aclaración o rectificación y de aquel en que debió aparecer ésta. Tratándose de una transmisión de radio o televisión, estos ejemplares se reemplazarán por el testimonio o certificado que otorgue la **División de Comunicación Social** en que conste el texto de la audición o programa o por otros medios de prueba.

El tribunal concederá al Director tres días para responder y vencido este plazo, haya o no contestado, resolverá sin más trámite, tomando en consideración la circunstancia de que el reclamante haya sido realmente ofendido o infundadamente aludido y el hecho de que la rectificación no incurra en alguno de los delitos penados en la presente ley. La reclamación será notificada al Director o a quien lo reemplace por cédula que contendrá copia íntegra de ella y de su proveído. Serán lugares hábiles para practicar esta notificación los domicilios que se hubieren señalado en conformidad a lo dispuesto en la letra c) y d) e inciso 7º del artículo 6º. La resolución será apelable en el solo efecto devolutivo y el recurso será visto de preferencia sin esperar la comparecencia de las partes.

El Tribunal en la resolución que ordene publicar la respuesta podrá aplicar al Director una multa de uno a tres **ingresos mínimos**.

El Director que desobedeciere dicha orden, será penado como autor del delito de desacato con presidio menor en sus grados mínimo a medio y, además, será sancionado con una nueva multa de seis a diez **ingresos mínimos** y con la suspensión inmediata de la publicación o transmisión de que se trata. Estas últimas serán impuestas de inmediato por el Tribunal.

El propietario del órgano de publicación o concesionario de la radiodifusora o televisora, podrá solicitar se alce la suspensión decretada por el Juez, comprometiéndose a insertar o difundir la respuesta en la primera edición o transmisión próximas. Si alzada dicha medida no se insertare o difundiere la respuesta, el Tribunal decretará la suspensión definitiva de la publicación o audición, comunicándolo en este último caso a la autoridad administrativa correspondiente, a fin de que decrete la cancelación de la concesión.

Artículo 13 Cuando por aplicación de las disposiciones del artículo anterior, un diario, revista, escrito periódico, estación radiodifusora o televisora fuere suspendido temporalmente, su personal percibirá durante el lapso de la suspensión todas las remuneraciones a que legal o contractualmente tuviere derecho, en las mismas condiciones como si estuviere en funciones.

Quando la suspensión fuere definitiva, en el caso del inciso final del artículo anterior, el propietario deberá pagar a su personal, por cada año de servicios, una indemnización equivalente a un mes en el caso de los empleados, o a treinta días en el caso de los obreros, de los sueldos o salarios que se disfrutaren al tiempo de decretarse la suspensión definitiva, considerándose como un año completo las fracciones superiores a seis meses.

Esta indemnización se devengará en beneficio del personal sin perjuicio de cualquiera otras indemnizaciones, gratificaciones, prestaciones o beneficios a que legal o contractualmente tuviere derecho por la terminación de su contrato.

Los patrones o empleadores dispondrán de un plazo de 30 días para cancelar esta indemnización y ella se considerará crédito privilegiado, de la categoría contemplada en el N° 4 del artículo 2472 del Código Civil.

No habrá lugar al pago de esta indemnización si el patrón o empleador, no obstante la suspensión, mantuviere en funciones al personal en las mismas condiciones en que prestaba sus servicios en el órgano suspendido definitivamente tanto en lo relativo a la naturaleza de su trabajo como en sus remuneraciones.

Artículo 14 El derecho a que se refieren los artículos anteriores podrá ejercitarse por el cónyuge, por los padres, hijos o hermanos de la persona agraviada o aludida, en caso de fallecimiento, enfermedad o ausencia. Todos ellos,

como asimismo la persona agraviada o aludida, podrán actuar por sí o por mandatarios.

Artículo 15 No se podrá ejercer el derecho de respuesta con relación a las apreciaciones personales que se formulen en artículos de crítica literaria, histórica, artística o científica, sin perjuicio de la sanción a que pueden dar lugar esos artículos, si por medio de su difusión se cometiere algunos de los delitos penados en la presente ley.

TITULO III

DE LOS DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA IMPRENTA U OTRA FORMA DE DIFUSION

I. PROVOCACION A LOS DELITOS

Artículo 16 Para los efectos de la presente ley se considerarán medios de difusión los diarios, revistas o escritos periódicos; los impresos, carteles, afiches, avisos, inscripciones murales, volantes o emblemas que se vendan, distribuyan o expongan en lugares o reuniones públicas; y la radio, la televisión, la cinematografía, los altoparlantes, la fonografía y en general cualquier artificio apto para fijar, grabar, reproducir o transmitir la palabra, cualquiera que sea la forma de expresión que se utilice, sonidos o imágenes.

Artículo 17º El que por algunos de los medios enunciados en el artículo anterior induzca directamente a la ejecución de los delitos de homicidio, robo, incendio o algunos de los delitos previstos en el artículo 480 del Código Penal, será castigado aunque el delito no llegue a consumarse, con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de uno a tres ingresos mínimos.

Con igual pena será castigado el que por algunos de los medios enunciados en el artículo anterior haga la apología de los delitos de homicidio, robo, incendio o algunos de los contemplados en el artículo 480 del Código Penal.

Artículo 18º Los que por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16, realizaren publicaciones o transmisiones que conciten el odio, la hostilidad o el menosprecio respecto de personas o colectividades en razón de su raza o religión serán penados con multa de seis a doce ingresos mínimos.

II. NOTICIAS FALSAS O NO AUTORIZADAS

Artículo 19 La imputación maliciosa de hechos sustancialmente falsos, o la difusión maliciosa de noticias sustancialmente falsas, como asimismo, la difusión maliciosa de documentos sustancialmente falsos, o supuestos, o alterados en forma esencial, o atribuidos inexactamente a una persona, por algunos de los

medios señalados en el artículo 16, será sancionada con multa de diez a cincuenta ingresos mínimos, cuando su publicación hubiere causado daño grave a la seguridad, el orden, la administración, la salud o la economía publicos, o fuere lesiva a la dignidad, el crédito, la reputación o los intereses de personas naturales y sus familiares o de personas jurídicas.

Igual pena sufrirán los que a sabiendas difundieren, por los mismos medios, disposiciones, acuerdos o documentos oficiales que tuvieren carácter secreto o reservado por disposición de la ley o de un acto de autoridad fundado en la ley. o documentos o piezas que formaren parte de un proceso que se haya ordenado mantener en reserva o en estado de sumario secreto.

En el caso del inciso primero, la rectificación completa y oportuna será causal extintiva de la responsabilidad penal. Respecto de la responsabilidad civil, el juez deberá considerar dicha rectificación al resolver sobre la apreciación del daño. Se entenderá completa y oportuna la rectificación que admita sin reticencias la falsedad de las noticias publicadas y que sea hecha antes de la audiencia a que se refieren los artículos 554 y 574 del Código de Procedimiento Penal, o a la primera del procedimiento sumario, según el caso, o a aquella que se efectúe dentro del tercer día de haberse requerido por escrito por el afectado, o en la edición siguiente, en el caso de las revistas o de las otras publicaciones periódicas.

La rectificación deberá efectuarse con las mismas características que la difusión falsa y le será aplicable lo prescrito en el inciso final del artículo 11.

III. DELITOS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES

Artículo 20 El que cometiere el delito de ultraje a las buenas costumbres, por alguno de los medios enunciados en el artículo 16, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo y multa de uno a cuarenta **ingresos mínimos**.

Se considerará en especial que cometen ultraje público a las buenas costumbres y serán castigados con la pena establecida en el inciso anterior:

1º Los que internaren, vendieren o pusieren en venta, ofrecieren, distribuyeren, exhibieren o difundieren, o hicieren distribuir, exhibir o difundir públicamente escritos, impresos o no, figuras, estampas, dibujos, grabados, emblemas, objetos o imágenes obscenos o contrarios a las buenas costumbres

La venta, oferta, distribución o exhibición a menores de edad, será punible aunque no se efectúe públicamente.

La distribución a domicilio de los escritos

u objetos enumerados será castigada también con la misma pena; pero el simple hecho de entregarlos al correo o a alguna empresa de transporte o distribución sólo será pesquisable cuando la entrega se hiciera bajo faja o en sobre abierto. En todo caso serán pesquisables después de llegar a poder del consignatario.

2º Los que proferieren, hicieren proferir, transmitieren o difundieren expresiones, hechos o acciones obscenos o contrarios a las buenas costumbres.

3º Los que valiéndose de cualquier medio de difusión divulgaren avisos o correspondencias obscenos o contrarios a las buenas costumbres.

La pena se elevará al doble si el ultraje a las buenas costumbres en cualesquiera de las formas enunciadas, tiene por objeto la perversión de menores de dieciocho años.

Se presume que el ultraje a las buenas costumbres tiene por objeto la perversión de menores de dieciocho años cuando se empleen medios de difusión que, por su naturaleza, estén al alcance de los menores o cuando a un menor de esa edad se ofrezcan, vendan, entreguen o exhiban escritos, figuras, objetos o imágenes obscenos o contrarios a las buenas costumbres, o cuando el delito se cometiere dentro del radio de doscientos metros de una escuela, colegio, instituto, universidad o cualquier establecimiento educacional o de asilo destinado a niños y jóvenes.

4º Los impresores o editores de diarios, revistas, periódicos, escritos, impresos, carteles, afiches, avisos, inscripciones, volantes o emblemas, en cuyos talleres se impriman o multipliquen fotografías, imágenes, dibujos, palabras, frases o artículos de contenido obsceno atentatorios contra la moral o las buenas costumbres.

Para estos efectos los editores o impresores serán considerados autores, y sólo podrán excusar su responsabilidad en el caso en que se presente el que materialmente, sin su conocimiento o autorización, haya ordenado o realizado algunos de hechos referidos en el inciso precedente.

IV. DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

Artículo 21 Los delitos de calumnia e injuria, cometidos por cualquiera de los medios enunciados en el artículo 16, serán sancionados, en los respectivos casos, con las penas corporales señaladas en los artículos 413; 418, inciso primero, y 419 del Código Penal, y con multas de diez a setenta y cinco ingresos mínimos en los casos del Nº 1 del artículo 413 y del artículo 418 ; de diez a cincuenta ingresos mínimos en el caso Nº2 del artículo 413, y de diez a veinticinco ingresos mínimos en el caso del artículo 419.

Los que solicitaren una prestación cualquiera bajo la amenaza de dar a la publicidad, por

algunos de los medios enunciados en el artículo 16, documentos, informaciones o noticias que pudieren afectar el nombre, la posición, el honor o la fama de una persona, serán sancionados con multa de veinte a cien ingresos mínimos. Si la amenaza se consumare, la multa podrá elevarse al doble del monto señalado precedentemente, sin perjuicio de las penas corporales que correspondieren conforme al inciso anterior. El tribunal impondrá, además, la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio, en atención a la gravedad del daño pecunario causado por la amenaza y del daño moral ocasionado a la víctima, a sus familiares o a terceros, por la difusión de tales documentos, informaciones o noticias, en sus respectivos casos.

No constituyen injurias las apreciaciones que se formularen en artículos de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar.

Al inculpado de haber causado injuria por algunos de los medios señalados en el artículo 16, no le será admitida prueba sobre la verdad de sus expresiones sino cuando hubiere imputado hechos determinados y concurrieren también una o más de las circunstancias siguientes :

a) Que la imputación se produjere con motivo de defender un interés público real;

b) Que el afectado ejerciere funciones públicas y las imputaciones se refirieren a hechos propios de tal ejercicio;

c) Que la imputación aludiere a directores o administradores de empresas comerciales, industriales o financieras que solicitaren públicamente capitales o créditos y versare sobre hechos relativos a su desempeño en tales calidades, o sobre el estado de los negocios de las empresas en cuestión, y

d) Que la imputación se dirigiere contra algún testigo en razón de la deposición que hubiere prestado, o de ministros de un culto permitido en la República sobre hechos concernientes al desempeño de su ministerio.

En estos casos, si se probara la verdad de la imputación, el acusado será sobreseído definitivamente o absuelto de la acusación.

Artículo 21 A Derogado.

Artículo 21 B Derogado.

Artículo 22 La imputación de hechos determinados, relativos a la vida privada o familiar de una persona, difundida a través de alguno de los medios señalados en el artículo 16, efectuada sin autorización de ésta, y que provoque a su respecto daño o algunas formas

de descrédito, tales como la hostilidad, el menosprecio o el ridículo, será sancionada con la pena de multa de diez a cincuenta ingresos mínimos. En caso de reiteración o reincidencia en relación con una misma persona, se impondrá, además, la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio.

En las mismas penas incurrirán quienes grabaren palabras o captaren imágenes de otra persona, no destinadas a la publicidad y, sin consentimiento de ella, las difundieren por alguno de los medios señalados en el artículo 16, y provocaren las consecuencias señaladas en el inciso anterior.

Para los efectos de los incisos anteriores no se considerarán como hechos relativos a la vida privada o familiar de una persona los siguientes:

- a) Los referentes al desempeño de funciones públicas;**
- b) Los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento poseyere interés público real;**
- c) Los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público, a título gratuito u oneroso;**
- d) Las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieren sido captadas o difundidas por algunos de los medios señalados en el artículo 16;**

e) Los acontecimientos o manifestaciones de que el interesado haya dejado testimonio en registros o archivos públicos, y

f) Los consistentes en la ejecución de delitos de acción pública o participación culpable en los mismos.

Al inculpado de cometer el delito contemplado en el inciso primero de este artículo se le admitirá prueba de verdad de la imputación en los siguientes casos:

a) Si acreditare que el hecho verdadero imputado, aunque perteneciente a la vida privada, tiene real importancia respecto del desempeño correcto y eficaz de la función pública, o de la profesión u oficio del afectado, o de alguna actividad de significativa relevancia para la comunidad, o

b) Si el ofendido exigiere prueba de la verdad de la imputación contra él dirigida, y siempre que dicha prueba no afectare el honor o los legítimos secretos de terceros.

En los casos de las letras a) y b) del inciso anterior, probada la verdad de la imputación, el inculpado quedará exento de pena.

Se considerarán, en todo caso, pertenecientes a la vida privada los hechos relativos

a la vida sexual, conyugal o doméstica de una persona, salvo que ellos fueren constitutivos de delitos.

V. PROHIBICIONES Y CASOS DE INMUNIDAD

Artículo 23 La difusión de noticias o informaciones emanadas de juicios, procesos o gestiones judiciales pendientes o afinados, no podrá invocarse como eximente o atenuante de responsabilidad civil o penal, si con dicha difusión se cometiere alguno de los delitos sancionados en los artículos 20, 21 ó 22.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior las publicaciones jurídicas de carácter especializado, las que no darán lugar a responsabilidad civil ni penal por la difusión de noticias o informaciones de procesos o gestiones judiciales afinados.

Artículo 24 Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio de difusión, de la identidad o de cualquier otro antecedente que conduzca a ella, de menores de dieciocho años, ya sean autores, cómplices, encubridores o víctimas de delitos. La infracción de este artículo será sancionada con multa de diez a cincuenta ingresos mínimos.

Artículo 25 Los Tribunales Podrán prohibir la divulgación por cualquier medio de difusión de informaciones concernientes a determinados juicios de que conozcan. Los que infrinjan esta prohibición serán

sancionados con reclusión menor en sus grados mínimos a medio y multa de uno a cuatro ingresos mínimos

La prohibición podrá decretarla el Juez sólo cuando la divulgación pueda entorpecer el éxito de la investigación o atentar contra las buenas costumbres, la seguridad del Estado o el orden público, y deberá ser publicada gratuitamente en uno o más diarios, que el Juez determine, **del lugar donde se sigue la causa, o de la cabecera de la provincia o de la capital de la región si allí no los hay.** La no publicación de la referida prohibición dentro del plazo de cuarenta y ocho horas será sancionada como delito de desacato con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.

La resolución que impone la prohibición será apelable en el solo efecto resolutivo. El recurso podrá interponerse por las partes o por cualquier periodista colegiado y el Tribunal de Alzada conocerá de él en Cuenta.

Artículo 26 Las ofensas al honor de las personas, a la buenas costumbres y a la seguridad interior o exterior del Estado que se cometieren por algunos de los medios de difusión que señala el artículo 16, serán sancionadas en conformidad a las disposiciones del Código Penal, de la Ley de Seguridad Interior del Estado y de la presente ley.

Si las informaciones, imágenes o comentarios sobre crímenes, simples delitos, suicidios, accidentes y catástrofes naturales difundidos por algunos de los medios señalados en el artículo 16 ofendieren

gravemente los naturales sentimientos de piedad y respeto por los muertos, heridos o víctimas de tales delitos, suicidios, accidentes y catástrofes, los responsables serán penados con multas de seis a doce **ingresos mínimos**.

Artículo 27 Se prohíbe, bajo pena de multa de dos a diez **ingresos mínimos**, la divulgación por cualquier medio de difusión de avisos e informaciones que ofrezcan o recomienden medicamentos que hayan sido declarados nocivos por el Servicio Nacional de Salud.

De las contravenciones a lo dispuesto en el inciso anterior y en el artículo 186 del Código Sanitario, responderán los productores o los vendedores que encarguen la publicación de los avisos. En caso de reincidencia se aplicará, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47, la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados.

Artículo 28 Los Senadores y Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos.

No darán lugar a acción penal las reseñas fieles que hagan los diarios de las discusiones habidas en las Cámaras legislativas o de las alegaciones producidas ante los tribunales de justicia, ni los informes u otros documentos que por su orden se impriman.

TITULO IV

DEL PROCEDIMIENTO Y REGLAS GENERALES

Artículo 29 La responsabilidad penal por los delitos sancionados en el Título III de la presente ley se determinará de conformidad con las reglas generales del Código Penal y del inciso 2º del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

Se consideran también autores:

a) Si se tratare de un diario, revista o escrito periódico, el director o quien legalmente lo reemplazare al efectuarse la publicación; en el caso del artículo 9º, el que ejerza de hecho la dirección;

b) Si se tratare de otras publicaciones, y el autor no fuere conocido, el editor y, a falta de éste, el impresor;

c) Si se tratare de difusiones efectuadas por radio, televisión, u otro medio similar, el director del los programas informativos, si lo hubiere, y, en su defecto, el director de la respectiva emisora o quien legalmente lo reemplace, y

d) Si se tratare de la exhibición de cintas cinematográficas no autorizadas por el Consejo de Censura,

el propietario de la cinta, el distribuidor de la misma, y el empresario de la sala en que se proyectare.

Quedarán exentas de responsabilidad penal las personas señaladas en las letras a) y c) cuando acrediten de modo irrefragable que no hubo culpa de su parte en la difusión delictuosa.

Artículo 30 Si las disposiciones de las letras a) y c) del artículo anterior no pudieren ser aplicadas por haberse infringido lo prescrito en los artículos 5º ó 6º de la presente ley, será responsable el propietario del diario o publicación periódica o el concesionario de la estación emisora, y si fueren personas jurídicas, lo serán los administradores en las sociedades de personas, el gerente en las anónimas, y el presidente en las corporaciones o fundaciones.

Artículo 31 Las imputaciones injuriosas, calumniosas, maliciosas de un hecho o de un acto falso, en los términos expresados en el artículo 19, o las que afectaren la vida privada de una persona o de su familia, en la forma señalada en el artículo 22, efectuadas a través de un medio de comunicación social, darán derecho a indemnización pecunaria conforme a las reglas del Título XXXV del Libro IV del Código Civil, por el daño emergente, el lucro cesante o el daño moral. En tal caso, la acción se sujetará a las reglas del procedimiento sumario y la prueba se apreciará en conciencia. Todo ello será sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del

artículo 19 , respecto de las conductas sancionadas en el inciso primero de tal disposición.

Lo dispuesto en el artículo 2331 del Código Civil se entenderá referido a los delitos de injurias y calumnias cometidos a través de medios distintos de los expresados en el artículo 16 de la presente ley.

Si la imputación consistiere en la comisión de un delito, no habrá lugar a indemnización, si se probare tal comisión por sentencia ejecutoriada.

Tampoco habrá lugar a indemnización respecto de los propietarios, los editores, los directores y los administradores de un medio de comunicación social:

a) Cuando se limiten a reproducir noticias, informaciones o declaraciones difundidas por agencias informativas o que provinieren de una autoridad pública en materias propias de su competencia.

b) Cuando acrediten que se empleó de su parte la debida diligencia para evitar la difusión, en las transmisiones que se emitieren en directo por medio de radiodifusión sonora y televisual.

c) Cuando, tratándose de la difusión de una noticia falsa en los términos expresados en el

artículo 19, el medio de comunicación se limitare a reproducir las noticias, informaciones o declaraciones que provinieren de una persona o institución que, a juicio del tribunal, sea razonablemente confiable o idónea respecto de la materia de que se trate , o que se difundieren en programas, secciones o espacios determinados, abiertos al público, respecto de los cuales se señalare expresamente que lo allí difundido no compromete al medio periodístico.

El autor de la imputación, los propietarios, los concesionarios, editores, los directores y los administradores del medio de comunicación social, serán solidariamente responsables de las multas impuestas y de las indemnizaciones que procedan.

Artículo 32 Si alguno de los responsables de los delitos a que se refiere la presente ley no enterare en arcas fiscales el importe de la multa dentro del quinto día de ejecutoriada la sentencia, sufrirá por vía de sustitución y apremio un día de reclusión por cada vigésimo de ingreso mínimo de multa, sin que la privación de la libertad pueda exceder de doscientos días. El juez de la causa hará efectivo el apremio personal con la sola certificación de no haberse enterado la multa, estampada a petición de parte o de oficio.

Artículo 33 La acción civil para obtener indemnización de daños y perjuicios derivada de los delitos penados en esta ley se regirá por las reglas generales, salvo lo dispuesto en el artículo 31.

Artículo 34 La indemnización de perjuicios provenientes de los delitos sancionados en los artículos 19, 21 y 22, podrá hacerse extensiva al daño pecunario que fuere consecuencia de la depresión anímica o psicológica sufrida por la víctima o su familia con motivo del delito, y a la reparación del daño meramente moral que tales personas acreditaren haber sufrido. Si la acción civil fuere ejercida por el ofendido, no podrán ejercerlas sus familiares. Si sólo la ejercieren éstos deberán obrar todos conjuntamente y constituir un solo mandatario.

El tribunal fijará la cuantía de la indemnización tomando en cuenta los antecedentes que resultaren del proceso sobre la efectividad y la gravedad del daño sufrido, las facultades económicas del ofensor, la calidad de las personas, las circunstancias del hecho y las consecuencias de la imputación para el ofendido.

Para la fijación de las multas establecidas en los artículos 19, 21 y 22 en su caso, se aplicarán los mismos criterios señalados en el inciso anterior.

Artículo 34 A Derogado

Artículo 35 Salvo el caso contemplado en el artículo 8º de la presente ley, serán competentes para conocer de los delitos e infracciones previstos en ella, los jueces a quienes el Código Orgánico de Tribunales entrega el conocimiento de las causas seguidas por razón de crímenes o simples delitos.

El afectado u ofendido deberá interponer su acción ante el Tribunal competente de acuerdo con las reglas generales; pero si tuviere su domicilio en una provincia distinta de aquella en que tenga su asiento ese Tribunal, gozará del privilegio de pobreza y tendrá derecho a ser atendido por el Servicio de Asistencia Judicial del Colegio de Abogados, en el ejercicio de las acciones civiles y penales que entablare.

Artículo 36 En la sustanciación de los juicios seguidos por las infracciones y delitos establecidos en la presente ley, se aplicará el procedimiento relativo a las faltas que establece el Título I del Libro III del Código de Procedimiento Penal, sin que rija la excepción contenida en el artículo 551 de ese Título.

El recurso de apelación interpuesto en contra de las resoluciones que se dicten en estos juicios, a excepción de las sentencias definitivas, se concederá sólo en el efecto devolutivo.

En todo caso, tratándose de crímenes o simples delitos, habrá lugar a los recursos de casación y revisión conforme a las reglas generales.

En la sustanciación de los juicios de calumnia o injuria perpetrados por alguno de los medios indicados en el artículo 16, se aplicará el procedimiento contemplado en el Título II del Libro III del Código de Procedimiento Penal, con excepción de lo dispuesto en los artículos 585 y 587 de ese texto legal, y no será necesario oír al Ministerio Público.

Artículo 37 En la sustanciación de los juicios por los delitos establecidos en esta ley en que proceda la encargatoria de reo, se concedera la excarcelación a los procesados aun en caso de reincidencia.

Artículo 38 Habrá acción pública para perseguir los delitos penados en la presente ley, con excepción de los contemplados en los artículos 19, 21 y 22, que serán de acción privada, Dicha acción corresponderá al personalmente ofendido o a las demás personas señaladas en los artículos 424 y 428 del Código Penal, en su caso.

Artículo 39 Habrá acción pública para perseguir los delitos de injuria y calumnia cometidos contra un Jefe o Ministro de Estado extranjero que se hallare en el territorio nacional.

Artículo 40 Antes de dictarse sentencia, en primera instancia o de la vista de la causa, en segunda instancia, las partes podrán impetrar del Tribunal la petición de informe al Colegio de Periodistas sobre aspectos técnicos de la función periodística que, a su juicio, resulten indispensables para el mejor acierto del fallo. El Tribunal deberá solicitar dicho informe al Consejo Regional respectivo, bajo apercibimiento de que si no fuere evacuado en el término fatal de 10 días, se prescindirá de él.

Tratándose de delitos cometidos por la radio, podrá requerirse también informe, sobre las modalidades propias de este medio de difusión, a la Asociación de Radiodifusores de Chile.

Artículo 41 En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal, el juez podrá ordenar que se recojan no más de cuatro ejemplares de los escritos, impresos, carteles, películas o dibujos, que hayan servido para cometer el delito. Pero esa medida podrá hacerse extensiva a todos los ejemplares de la obra abusiva, si se tratare de delitos contra las buenas costumbres o contra la seguridad exterior del Estado, y de la provocación de los delitos de homicidio, robo, incendio o algunos de los previstos en el artículo 480 del Código Penal.

En la sentencia condenatoria podrá ordenarse, en todo caso, el comiso o la destrucción de los escritos, impresos, carteles, películas o dibujos abusivos que se vendieren, distribuyeren o exhibieren públicamente, o bien sólo su destrucción parcial.

La sentencia condenatoria por delitos contra las buenas costumbres, ordenará necesariamente la destrucción de los escritos, dibujos, estampas y demás objetos numerados en el artículo 20 o cualquiera otro que haya servido para cometer el delito.

Artículo 42 Aunque el hecho delictuoso fuere penado con multa superior a veinte **ingresos mínimos**, será considerado simple delito para los efectos legales, salvo que por otra razón legal deba ser calificado de crimen.

Artículo 43 Tanto la acción penal como la civil provenientes de los delitos previstos por esta ley, prescriben

en el plazo de tres meses contados desde la fecha en que se haya difundido, por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16, la producción abusiva. Pero si ésta fuere un libro, la acción prescribirá en un año.

Si la producción abusiva ha sido dada a la publicidad en el extranjero, los tres meses o el año se contarán desde la fecha de su introducción en el territorio nacional.

El ejercicio de la acción penal interrumpe el plazo de prescripción de la acción civil y, en tal caso, la prescripción comenzará nuevamente a correr una vez ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio criminal. Se entenderá ejercitada la acción penal por el solo hecho de la presentación de la querrela correspondiente.

Artículo 44 El producto de las multas provenientes de la aplicación de la presente ley se destinará a aumentar los recursos de la Biblioteca Nacional y del Patronato Nacional de Reos, por partes iguales.

Artículo 45 Cada vez que en esta ley se haga referencia a ingresos mínimos, se entenderá hecha a ingresos mínimos mensuales.

Artículo 46 Siempre que algunos de los ofendidos lo exigiere, el tribunal de la causa ordenará la difusión de la sentencia condenatoria recaída en un proceso por alguno de los delitos a que se refiere el Título III de la presente ley, en la publicación periódica o estación

emisora en que se hubiere cometido la infracción. En los demás casos, el tribunal podrá ordenar dicha difusión parcial o total a su prudente arbitrio, y señalar la forma, extensión y oportunidad de la misma. En ningún caso podrá exigirse al medio de difusión afectado que destine, en un solo número, a dicha publicación más de una decima parte de una edición ordinaria, tratándose de la prensa periódica, o de una hora continua de transmisiones en un día, tratándose de una estación emisora.

Si el medio de difusión infractor no diere cumplimiento a dicha obligación, el tribunal impondrá una multa de cinco a quince **ingresos mínimos** a su director, y podrá ordenar además la suspensión del medio de difusión respectivo hasta por treinta días. El producto de la multa servirá para pagar la publicación o difusión de la sentencia en otro medio de difusión que señalare el ofendido, o, en su defecto, el Juez. Al pago de la multa serán aplicables las disposiciones de los artículos 31 y 32. Sin perjuicio de lo anterior, el director del medio de difusión será sancionado, como autor del delito de desacato, con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados.

Artículo 47 En caso de reincidencia en los delitos e infracciones penados en la presente ley las penas de multas serán dobladas en la primera vez y triplicadas en los casos siguientes.

Artículo 48 El juez que sustancia un proceso por infracción a cualquiera de las disposiciones contenidas en

la presente ley, deberá comunicarlo al Consejo Regional del Colegio de Periodistas respectivo, incluyendo en la comunicación, copia íntegra de la denuncia, querrela o autocabeza del proceso, según corresponda.

Artículo 49 La publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviere reclamaciones pendientes, serán sancionados con multa de cuatro a cinco **ingresos mínimos**. Sera aplicable en este caso lo dispuesto en los artículos 31 y 32.

La sentencia condenatoria que se dicte respecto de estos delitos ordenará el comiso y la destrucción de dichos mapas, cartas o esquemas geográficos.

Corresponderá al Instituto Geográfico Militar, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, el levantamiento y confección de cartas del territorio, y al Departamento de Navegación e Hidrografía de la Armada igual autoridad en lo relacionado con la cartografía marítima. Corresponderá, asimismo, al Instituto Geográfico Militar la revisión y aprobación de todo trabajo de levantamiento o cartografía que por circunstancias especiales se recomienden a otras reparticiones públicas o privadas, en cuyo caso los originales y antecedentes técnicos correspondientes a las operaciones ejecutadas pasarán a formar parte del archivo y documentación del Instituto, correspondiéndole estas mismas atribuciones al Departamento de Navegación e Hidrografía en caso de tratarse de levantamientos costaneros.

Artículo 50 El Director de la Biblioteca Nacional velará por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 16.441, de 1º de marzo de 1966, en lo que corcierna a libros y documentos privados o públicos que por su carácter histórico o artístico deban conservarse en museos o archivos o permanecer en algún sitio público a título conmemorativo o expositivo.

No podrán exportarse sin previa autorización del Director de la Biblioteca Nacional los impresos publicados con anterioridad a 1925.

Artículo 51 Se declaran de caracter técnico todas las publicaciones ordenadas hacer por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, como las adquisiciones de libros, bibliotecas completas, publicaciones periódicas, documentos históricos o de interés científico, obras de arte, objetos de artes aplicadas, históricos y científicos, que realice el mismo Servicio.

Artículo 52 Concédese a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, a los servicios de su dependencia, y al Fondo Histórico y Bibliográfico " José Toribio Medina ", liberación postal y telegráfica.

Artículo 53 Para todos los efectos relativos a esta ley, se entenderá por " familia " o " familiares " de una persona:

- a) Al cónyuge;
- b) A los ascendientes, descendientes y colaterales legítimos, hasta el segundo grado de consanguinidad;

- c) **A los padres y a los hijos naturales,
y**
- d) **A los ascendientes y descendientes
hasta el primer grado de afinidad
legítima.**

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º Los actuales propietarios de agencias noticiosas nacionales que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5º. dispondrán del plazo de seis meses, contados desde el 13 de julio de 1967, fecha de la publicación de la Ley N° 16.636. para ajustarse a ellos.

Artículo 2º Las exigencias establecidas en el artículo 3º se harán efectivas transcurridos que sean 30 días desde la fecha de publicación del reglamento que el Presidente de la República dicte para la aplicación del citado artículo debiendo, asimismo, sujetarse a ellas los actuales propietarios de imprentas, litografías o talleres impresores.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en la correspondiente Recopilación de la Contraloría General de la República. **EDUARDO FREI MONTALVA.** Pedro J. Rodríguez ■